

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS ISLAS BALEARES (pp. 1-17)

—

DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A LES ILLES BALEARS (pp. 18-34)

JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

Departament d'Urbanisme i Territori. Consell Insular de Mallorca

—

Consultor

Universitat Oberta de Catalunya

Sumario: 1. Introducción. 2. Actividad legislativa. 2.1. Se aprueba el Decreto-Ley 2/2015, de 24 de julio, de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales. 2.2. Se aprueba el Decreto 39/2015, de 22 de mayo, por el que se fijan los principios generales de las actividades agroturísticas en explotaciones agrarias preferentes de las Illes Balears. 2.3. Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas interiores del litoral de las Illes Balears. 3. Políticas sobre patrimonio natural. 3.1. Decreto 47/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 del Archipiélago de Cabrera, Decreto 48/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de Ses Salines de Ibiza y Formentera y Decreto 49/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de la Serra de Tramuntana. 3.2. El águila pescadora vuelve a nidificar en las Pitiusas. 4. Política de aguas. 4.1. Plan de Sequía en Ibiza: objetivo 2016. 4.2. Los alcaldes de Ibiza lanzarán una campaña de consumo responsable de agua a raíz de la reunión con el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. 5. Otras noticias ambientales. 5.1. El Govern de les Illes Balears anuncia la ampliación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. 5.2. El Govern se compromete con Oceana a mejorar la protección de los espacios naturales marinos. 5.3. El Govern de les Illes Balears y los consejos insulares de Mallorca y Menorca entrarán a formar parte de la Alianza Mar Blava. 5.4. El Govern quiere dar impulso a la Reserva de la Biosfera de Menorca y dotar el Parque Natural de s'Albufera des Grau de un plan de gestión. 5.5. Los plenos y los expedientes de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares serán públicos. 5.6. Son Bosc quedará protegido definitivamente. 5.7. El Govern traslada a Spectrum su negativa a las prospecciones.

1. Introducción

Arranca la IX legislatura en las Islas Baleares con una mayoría parlamentaria completamente diferente. Las últimas elecciones han dado como resultado un giro a la izquierda que propicia la posibilidad de conformar un gobierno, por primera vez en el archipiélago, netamente de esta orientación política. Los anteriores dos pactos de gobierno multipartito habían necesitado el concurso de la desaparecida Unió Mallorquina, partido regionalista de centroderecha. Eso implica que, también por primera vez, la oposición en el Parlamento esté constituida por tres fuerzas políticas (Partido Popular, Proposta per les Illes y Ciudadanos) y el Govern se mantenga con el apoyo de otras tres fuerzas (Partido Socialista, Més y Podemos).

Valga este párrafo introductorio para enmarcar las primeras iniciativas de la nueva legislatura, dirigidas a modificar los aspectos más controvertidos de las numerosas leyes aprobadas entre el 2011 y el 2015, con contenidos ultraliberales que han contribuido a deformar la tradición normativa y a romper el bloque jurídico, con intromisiones cruzadas entre la legislación agrícola, de turismo, de minas y de suelo. Esta visión de predominio sectorial sobre las leyes de ordenación territorial, urbanística y de medio ambiente ha generado un escenario complejo que hay que superar. La protección territorial y ambiental se ha visto seriamente afectada por la dinámica mencionada. Si se repasan los números de esta revista correlativos a la generación normativa en la VIII legislatura, se puede comprobar el retroceso experimentado respecto al uso racional de los recursos naturales previsto y protegido por el artículo 45 de la Constitución

Española, y respecto al deber de luchar contra la especulación y de garantizar el correcto uso del territorio, que obliga al cumplimiento de la normativa vigente. La realidad es que las reformas legislativas aprobadas la pasada legislatura han provocado situaciones de dispensa legal y de amnistías encubiertas que han premiado a los infractores de la norma, lo que ha supuesto una vulneración del principio de igualdad consagrado asimismo en el texto constitucional. En la misma línea, este principio de igualdad se rompió al favorecer a unos colectivos concretos, marginando buena parte de la sociedad y privilegiando el hecho de ostentar unos derechos que se niegan al conjunto de la ciudadanía.

Ante esta situación, se ha anunciado un decreto ley de medidas urgentes, que estaba previsto para finales de octubre, cuya intención es reparar algunas de las previsiones legislativas más desafortunadas de la legislatura anterior. Aunque se ha forzado el cierre de esta crónica esperando la novedad normativa, por ahora no se ha producido la esperada aprobación por parte del Consell de Govern de la Comunidad Autónoma, ni tampoco se han incorporado otras medidas anunciadas en materia ambiental. Por el momento se han frenado y retirado iniciativas no aprobadas o no ejecutadas en su totalidad por el equipo de gobierno anterior, para así proceder a una revisión en profundidad, como por ejemplo: el Plan Director Sectorial de Residuos de la Isla de Mallorca, algunas modificaciones en el Plan Territorial Insular de Mallorca y de Menorca, la revisión del proyecto de ampliación de la carretera general de Maó a Ciutadella (también en Menorca), el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, y el Decreto de delimitación y ordenación de los encinares de las Islas, entre muchos otros documentos.

Se tendrá que esperar a los próximos meses para ver hacia dónde se dirigen las políticas ambientales a lo largo de los cuatro años de nueva legislatura, donde se anuncian la implantación de nuevos espacios naturales y políticas de paisaje, la revisión de la legislación de evaluación ambiental y de la política de residuos, y nuevos planes de carácter territorial, entre muchas otras iniciativas donde el medio ambiente recupera protagonismo.

2. Actividad legislativa

2.1. *Se aprueba el Decreto-Ley 2/2015, de 24 de julio, de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales*

El Consell de Govern del día 24 de julio aprobó, con carácter de urgencia, un decreto-ley para neutralizar los efectos del recurso de constitucionalidad interpuesto contra algunos artículos de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de Comercio de las Illes Balears, que había derogado la hasta entonces vigente Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial de las Illes Balears. La adaptación normativa se fundamentaba en la necesidad de adaptar la regulación comercial a la nueva legislación estatal derivada de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. El nuevo marco *desregulador* deja poco margen a los operadores autonómicos para ordenar una actividad que plantea constatados impactos ambientales y territoriales, especialmente con respecto a la implantación de grandes superficies que atraen a miles de personas que se desplazan en vehículos privados, con repercusiones sobre la movilidad y la contaminación difusa, además de otros impactos territoriales y paisajísticos como el sellado del suelo a consecuencia de la construcción de grandes aparcamientos o el elevado consumo energético para satisfacer la demanda de estos espacios.

La liberalización de servicios ha conllevado que el desarrollo normativo en materia comercial exima de autorizaciones previas a una gran mayoría de establecimientos comerciales y de servicios, que se someten a régimen de comunicación previa. La Ley estatal 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, ha fijado el umbral en 750 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

Lo que conviene comentar aquí es que en Baleares el régimen de superficies se ajusta a la realidad insular, lo que implica que el umbral se establezca en 700 m² en Mallorca, 400 m² en Menorca e Ibiza y 200 m² en Formentera. Y todo ello se argumenta, precisamente, por razones de interés general relacionadas con la distribución comercial, la protección medioambiental y del entorno urbano, la ordenación del territorio y la preservación del patrimonio histórico y artístico, sin olvidar el hecho de la dispar extensión y las características geoeconómicas de cada una de las islas.

La invocación al medio ambiente y el paisaje y al impacto sobre el entorno urbano es, actualmente, el único motivo permitido por la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, para regular los efectos de la implantación de grandes superficies comerciales, que se convierten en espacios que modifican la morfología y las dinámicas territoriales y urbanas.

La ulterior relación ambiental en materia comercial la encontraremos en un futuro en el desarrollo de los planes directores sectoriales de los equipamientos comerciales, responsables de implantar las medidas de adecuación al entorno en función de las condiciones territoriales de las zonas potenciales de recepción de estos grandes establecimientos, por razones imperiosas de interés general.

Según la Directiva 2006/123/CE, el concepto de “razones imperiosas de interés general” ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y puede seguir evolucionando. La noción reconocida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia abarca al menos los ámbitos siguientes:

[O]rden público, seguridad pública y salud pública, en el sentido de los artículos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de política social, protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, protección de los trabajadores, incluida su protección social, bienestar animal, preservación del equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social, prevención de fraudes, prevención de la competencia desleal, protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural, protección de los acreedores, garantía de una buena administración de justicia, seguridad vial, protección de la propiedad intelectual e industrial, objetivos de política cultural, incluida la salvaguardia de la libertad de expresión de los diversos componentes (en especial, los valores sociales, culturales, religiosos y filosóficos de la sociedad), la necesidad de garantizar un alto nivel de educación, mantenimiento de la diversidad de prensa, fomento de la lengua nacional, conservación del patrimonio nacional histórico y artístico y política veterinaria.

Habrá que esperar a los avances que se produzcan en la redacción de los instrumentos de ordenación territorial para comprobar cuáles son las diferentes estrategias insulares que se desplegarán con la intención de controlar los efectos territoriales y ambientales de la implantación de grandes establecimientos comerciales.

2.2. Se aprueba el Decreto 39/2015, de 22 de mayo, por el que se fijan los principios generales de las actividades agroturísticas en explotaciones agrarias preferentes de las Illes Balears

En la legislatura anterior el turismo fue uno de los grandes protagonistas de las innovaciones legislativas realizadas. En esta línea, se ha aprovechado el valor estratégico del sector agrícola en las islas para intentar buscar alternativas a la generación de rentas en el campo allí donde la actividad no da más de sí. En este contexto, la Ley 12/2014, de 16 diciembre, Agraria de las Illes Balears, se aprobó con la pretensión de impulsar también las actividades complementarias que pueden generar rentas añadidas a las de la actividad agraria. Con ello se busca aportar un complemento económico que permita el mantenimiento de las explotaciones agrarias y el patrimonio arquitectónico rural de las Islas Baleares desde una óptica de dinamización del sector agrario mediante el impulso de la realización de múltiples actividades en la explotación agraria, todo ello con el objetivo de asegurar la viabilidad en el tiempo y crear y mantener empleo.

La Ley entiende la actividad agraria como un conjunto de trabajos necesarios para la obtención de productos agrícolas, ganaderos o forestales. Se considera la agricultura un sector de la actividad económica que, a diferencia de los sectores secundario y terciario, tiene una importancia de primer orden no solo como actividad de producción, sino también en los ámbitos social, territorial, paisajístico y medioambiental. Es lo que se denomina un *sector estratégico*, no tanto por el peso económico que aporta como por el hecho de garantizar la conservación del paisaje rural.

Por este motivo, se incentivan las actividades complementarias a la agraria que incluyen alternativas de diversificación relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas vinculadas a una explotación agraria preferente. Estas actividades alternativas tendrían que representar una mejora de las rentas agrarias diferentes de las derivadas de la producción agrícola, ganadera o forestal.

En este marco normativo, el Decreto 39/2015, de 22 de mayo, por el que se fijan los principios generales de las actividades agroturísticas en explotaciones agrarias preferentes de las Illes Balears, intenta facilitar que el sector agrario sea capaz de aprovechar los recursos propios de la explotación y de generar sinergias y complementariedades entre las diversas actividades con el fin de ofrecer unos bienes y servicios nuevos de acuerdo con las demandas del mercado y de los condicionantes

agrosociales del territorio. Estas actividades implican impulsar el potencial agroturístico de las explotaciones, dando nuevos usos a las edificaciones existentes. Así, se potencia la explotación de los agroturismos, de los refugios, del agroocio y de la agrocultura.

Igualmente, el Decreto implanta un régimen simplificado de declaración responsable de inicio de la actividad agroturística dirigido a facilitar su implantación. Las competencias se distribuyen según la actividad: a) ante la Dirección General de Turismo de la Consejería de Turismo y Deportes o el consejo insular competente, en caso de que la actividad consista en agroturismo o agroocio; b) ante la Dirección General de Medio Rural y Marino de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio o los consejos insulares competentes, en caso de que la actividad consista en refugio o agrocultura.

Este reparto depende del desarrollo de las transferencias que cada consejo insular haya recibido en aplicación del Estatuto de Autonomía.

Como señala el Decreto, la facultad de inicio de las actividades queda, por lo tanto, condicionada y solo es posible si en el mismo momento de presentación de la declaración responsable el interesado ya cumple todos los requisitos exigibles de forma normativa, tanto si corresponden al ámbito material turístico como a otras materias. En todo caso, la Dirección General de Medio Rural y Marino o el consejo insular competente tendrán que emitir informe preceptivo y vinculante sobre la vinculación de la explotación agraria preferente de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 12/2014.

Por otro lado, se produce una especificidad para la autorización de obras. Así, cuando el inicio de la actividad agroturística requiera la realización de obras, será preceptiva la petición de informe a la Dirección General de Medio Rural y Marino o al consejo insular competente, de acuerdo con lo que fija el artículo 100 de la Ley 12/2014.

En cuanto al régimen de evaluación de impacto ambiental, el Decreto establece que, de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del apartado 4 del artículo 44 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, los nuevos establecimientos de agroturismo que tengan más de 30 plazas destinados al público estarán sujetos a la evaluación de impacto ambiental a que se refiere el grupo 7 h del anexo II de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears. Igualmente, estarán sujetas a la evaluación mencionada las reformas y las ampliaciones de agroturismos y hoteles rurales cuya

ejecución suponga que el establecimiento resultante disponga de más de 30 plazas destinadas al público. Se exceptúan de las evaluaciones las ampliaciones inferiores al 10% de las plazas existentes. En este punto nos encontramos un nuevo problema, el desplazamiento que se ha producido en la legislación autonómica de evaluación ambiental con la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que compromete la aplicación de estos preceptos en ausencia de una tabla de vigencia. Afortunadamente, el BOIB núm. 168, de 14 de noviembre de 2015 (pp. 45711 a 45712), somete a información pública el nuevo Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental de las Illes Balears con la intención de adaptarse a las exigencias del nuevo marco normativo básico del Estado, cuestión que analizaremos en el próximo número del RCDA.

2.3. Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas interiores del litoral de las Illes Balears

Como ya se explicó en su día en la RCDA, Baleares aprobó la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de las Illes Balears. Ahora, en desarrollo de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 8 del mencionado texto legal, se dicta el Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas interiores del litoral de las Illes Balears.

El objeto de esta nueva disposición normativa es fijar un marco jurídico homogéneo para todas las reservas marinas de las aguas interiores del litoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con respecto a las actividades de extracción de flora o fauna marina y las actividades subacuáticas. Con esta intención, se regulan las actividades siguientes: a) pesca profesional de artes menores y marisqueo profesional; b) pesca recreativa y marisqueo recreativo; c) especies protegidas y tallas mínimas; y d) actividades subacuáticas.

Esta regulación de actividad afecta a las reservas marinas de las aguas interiores del litoral de las Islas Baleares siguientes: a) la Reserva Marina de los Freus de Ibiza y Formentera; b) la Reserva Marina del Norte de Menorca; c) la Reserva Marina de la Bahía de Palma; d) la Reserva Marina del Sur de Mallorca; e) la Reserva Marina de la

Isla del Toro; f) la Reserva Marina de las Islas Malgrats; y g) la Reserva Marina del Levante de Mallorca.

En las Islas Baleares, las reservas marinas han demostrado ser un instrumento eficaz de conservación de los recursos pesqueros y de ayuda a la pesca profesional de artes menores: en las reservas hay más peces, son mayores, abundan especies que fuera de las reservas escasean y las capturas son más importantes en cantidad y calidad. Por otro lado, las reservas marinas se han consolidado como un importante referente para la actividad económica del buceo turístico, con más de 25.000 inmersiones anuales. Por eso, actualmente las Baleares disponen de las siete reservas mencionadas, con una superficie total de 58.000 ha, que son un importante instrumento de gestión pesquera del Govern de les Illes Balears.

Las reservas marinas declaradas al amparo de la legislación autonómica son áreas marinas donde se limita la explotación de los recursos marinos vivos para incrementar la repoblación de alevines y fomentar la proliferación de las especies marinas objeto de explotación o proteger los ecosistemas marinos con características ecológicas diferenciadas. De conformidad con lo que dispone el artículo 8.3 de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, en el interior de las reservas puede ser objeto de regulación cualquier actividad que pueda afectar a los recursos marinos vivos; entre estas, todas las actividades de extracción de flora o fauna marinas y las actividades subacuáticas.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears puede presumir de constituir la vanguardia en España en materia de reservas marinas con la declaración en 1982 del Paisaje Protegido Submarino en aguas de Mallorca en el entorno del Club Náutico de s'Arenal y el cabo de Regana. Formalmente, las primeras reservas se crearon en 1999 a partir del Decreto 91/1997, de 4 de julio, de protección de los recursos marinos vivos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Así, el 28 de mayo de 1999 se estableció la Reserva Marina de los Freus de Ibiza y Formentera; el 15 de junio de 1999, la Reserva Marina del Norte de Menorca; y el 6 de agosto de 1999, la Reserva Marina de la Bahía de Palma, a partir de la antigua figura del paisaje protegido submarino. Posteriormente, el 3 de mayo de 2002 se estableció la Reserva Marina del Sur de Mallorca; el 28 de mayo de 2004, la Reserva Marina de la Isla del Toro; el 15 de junio de 2004, la Reserva Marina de las Islas Malgrats; y, finalmente, el 23 de marzo de 2007, la Reserva Marina del Levante de Mallorca.

Con el tiempo, la normativa que regula cada una de estas reservas marinas ha experimentado un proceso autónomo de desarrollo y consolidación, a menudo a partir de decisiones tomadas en el marco de las comisiones de seguimiento correspondientes, de forma que actualmente se encuentra dispersa en 42 disposiciones de diferente rango, es innecesariamente compleja y heterogénea, y carece de un hilo conductor que le dé homogeneidad. Por eso, y con la entrada en vigor de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, se hizo aconsejable establecer, aun respetando las particularidades de las diferentes reservas, unos principios comunes en materia de reservas marinas a nivel de las Islas Baleares con el desarrollo reglamentario del artículo 8 de la Ley. Evidentemente, el Decreto también será de aplicación a todas las reservas marinas que se declaren en un futuro en aplicación de los artículos 8.1 y 9 de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura en las Illes Balears, y es muy probable que en esta legislatura se declaren nuevas reservas o se amplíen algunas de las existentes, a la vista de los anuncios realizados.

3. Políticas sobre patrimonio natural

3.1. Decreto 47/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 del Archipiélago de Cabrera, Decreto 48/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de Ses Salines de Ibiza y Formentera y Decreto 49/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de la Serra de Tramuntana

En el marco de las previsiones derivadas de la implantación de la red ecológica europea Natura 2000, se han empezado a desarrollar los instrumentos de gestión de las áreas incluidas en la propuesta autonómica. La declaración de lugares de importancia comunitaria (LIC) y de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) incorporadas a la red Natura 2000 comporta la declaración de zonas de especial conservación (ZEC) en aplicación de los artículos 4 y 6 de la Directiva 92/43/CEE y de los artículos 44 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Así, las medidas de conservación en ejecución de las mencionadas previsiones normativas tienen que comportar la adopción de los correspondientes planes o instrumentos de gestión adecuados y las medidas reglamentarias, administrativas o contractuales apropiadas. Igualmente, hay que recordar que la declaración de las ZEC se

tiene que aprobar lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años desde la adopción de la lista inicial de LIC para la región biogeográfica mediterránea.

Como requisito para la declaración de ZEC, es necesario que el plan o el instrumento de gestión haya sido aprobado con anterioridad o que se apruebe conjuntamente con esta declaración, de acuerdo con el artículo 42.3 de la Ley 42/2007. Las ZEPA, sin embargo, no es necesario que cumplan este requisito, dado que no están afectadas por las disposiciones de este artículo de la Ley. Sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, “los Estados tienen que garantizar que la clasificación de un lugar como ZEPA implique automática y simultáneamente la aplicación de un régimen de protección y conservación conforme con el derecho comunitario”.

En el caso de las Islas Baleares, corresponde al Consell de Govern, mediante un acuerdo, la declaración como ZEC de los LIC que hayan sido seleccionados y designados por la Comisión Europea, siguiendo el procedimiento que establece el artículo 9 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). Así, en cumplimiento del artículo 9.2 a) de la LECO, el 2 de agosto de 2013 el Consell de Govern acordó iniciar el procedimiento para declarar ZEC los LIC de las Islas Baleares que figuran en el anexo I del Acuerdo y facultar al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio para la tramitación administrativa que corresponde para elaborar los documentos de los planes o los instrumentos de gestión de las ZEC.

En aquel momento se inició la elaboración de una serie de planes de gestión que tenían que seguir las directrices de conservación de la red Natura 2000 en España, aprobadas por la Resolución de 21 de septiembre de 2011 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático (BOE, núm. 244, de 10 de octubre de 2011), documento que incorpora el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 13 de julio de 2011.

Después de un proceso de participación y del correspondiente trámite de información pública, se cerraron los documentos de gestión y se aprobaron las medidas de conservación necesarias para responder a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies de interés comunitario presentes en la zona de especial conservación (ZEC) y en la zona de especial protección para las aves (ZEPA) incluidas en los ámbitos del Archipiélago de Cabrera, de ses Salines de Ibiza y Formentera y de la Sierra de Tramuntana.

3.2. El águila pescadora vuelve a nidificar en las Pitiusas

Las islas de Ibiza y de Formentera son ahora las protagonistas de la noticia. Los planes de conservación y recuperación dan los frutos deseados en el caso del águila pescadora. Esta es una de las rapaces más escasas de todo el Mediterráneo. Debe destacarse que en la segunda mitad del siglo pasado sufrió una gran recesión y se convirtió en la especie más amenazada de todo el Estado: desapareció de las costas de la península ibérica, de una gran parte del litoral de las Baleares, de Cerdeña y de otras islas. Solo se mantuvo una pequeña población en la costa norte de Mallorca y en la Tramuntana de Menorca, en la isla de Córcega y en la costa de Marruecos.

Las amenazas sobre la especie pueden resumirse en dos factores, que son los que más han afectado a las águilas: la persecución directa y la electrocución. Hasta la década de 1970, era relativamente frecuente que las grandes águilas recibieran disparos y, en algunas zonas, los nidos eran expoliados como curiosidad o para comerse las crías. Otro factor incluso más insidioso es la electrocución: las águilas suelen ponerse en torres eléctricas y a menudo lo hacen mojadas, después de pescar, con un riesgo muy elevado de morir electrocutadas.

Afortunadamente, en el año 2007 el Govern aprobó un plan de conservación de la especie para fortalecer y dar continuidad a diversas actuaciones de protección que habían sido establecidas desde la década de 1980 tanto por la Administración como por las ONG de conservación. Al amparo del plan de conservación se ha trabajado para asegurar que la especie fuera respetada y que se realizaba una protección efectiva de las zonas de cría y de pesca. No obstante, una de las líneas de trabajo más importantes ha consistido en la corrección de puntos peligrosos para la electrocución de las aves. Un convenio entre el Govern y la empresa eléctrica ENDESA ha permitido aislar, en beneficio de diversas especies, 1.103 puntos peligrosos en todas las Baleares.

La evolución de la situación de conservación de la especie en el Mediterráneo ha sido muy positiva: la población balear, que había llegado a un mínimo de once parejas en la década de 1980, ha pasado a veinticuatro en la actualidad y se han recuperado zonas de nidificación en Cabrera, la costa de Artà y Calvià. En Córcega se ha pasado de tres parejas en el año 1974 a una treintena en la actualidad. Solo en Marruecos y Argelia la evolución de los últimos años ha sido negativa, y la especie ha perdido el 20% de

puntos de nidificación. Por otro lado, en Andalucía se ha iniciado un programa de reintroducción y actualmente nidifican las primeras parejas.

La novedad se ha producido este año en la isla de Ibiza: en un acantilado marino una pareja ha realizado puestas por segundo año consecutivo. El año pasado no hubo eclosión (cosa que suele pasar con aves inexpertas), pero este año una cría ha completado su desarrollo y vuela desde hace algunos días por la zona. Probablemente, el animal emprenderá una fase de dispersión que lo puede llevar hasta la península o el continente, pero la pareja está bien asentada y es el núcleo inicial para que se vuelva a extender por las costas de Ibiza, Formentera y algunos islotes. Cabe destacar que el nido donde han criado las águilas se halla justamente donde habían nidificado por última vez en la década de 1970; el nido viejo se había deshecho, y el personal de Medio Ambiente lo había reconstruido para estimular el asentamiento de las aves.

4. Política de aguas

4.1. Plan de Sequía en Ibiza: objetivo 2016

El agua es un recurso escaso y limitado en las Islas, lo que, en el caso de Ibiza, todavía es más evidente. Es indudable que hay un problema de recursos hídricos que se tiene que solucionar con urgencia. La tramitación del Plan de Sequía abre la posibilidad de implantar medidas concretas y extraordinarias y constituye un marco jurídico del que no se dispone actualmente. El problema se originó en el momento en que en la anterior legislatura se adoptó la decisión de desvincular el Plan de Sequía del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Uno de los nuevos retos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca es revisar el Plan Hidrológico, que incumple los dictámenes ambientales de la Unión Europea.

Por otro lado, se plantearán al Gobierno central las necesidades de infraestructuras de la isla, una de las cuales es la desalinizadora de Santa Eulària des Riu, que todavía no está recepcionada y acumula un sobrecoste del 50%. Igualmente, es necesario que el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa y los ayuntamientos de la isla adopten el compromiso de impulsar un consumo responsable del agua en esta isla, que lleva 24 meses en sequía técnica. En este sentido, se priorizará el uso doméstico sobre el industrial mientras se desvían caudales y se asesora técnicamente a los ayuntamientos sobre las depuradoras y las desalinizadoras. Hace falta un cambio de paradigma y una

profunda transformación de mentalidad para entender las consecuencias del consumo de un recurso por encima de su umbral de recuperación o renovación.

4.2. Los alcaldes de Ibiza lanzarán una campaña de consumo responsable de agua a raíz de la reunión con el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

Relacionado con la reseña anterior, a lo largo del verano de 2015 se han vivido problemas reales de abastecimiento de agua en Ibiza. De hecho, se intentó elaborar y aprobar un decreto-ley destinado a paliar el déficit con la aplicación de medidas extraordinarias.

Las reticencias a recurrir a un decreto-ley por parte del nuevo Govern, en gran medida como reacción al abuso que se realizó de esta figura legislativa en la anterior legislatura, provocó la derivación de las medidas hacia los ayuntamientos de la isla.

Los alcaldes ibicencos valoraron públicamente el esfuerzo del Govern por contribuir a solucionar los problemas de sequía y de calidad y saneamiento del agua que sufre la isla y, por ello, acordaron publicar un bando, de forma conjunta, para recomendar el consumo responsable de agua y otras medidas de sensibilización de la población ante la manifiesta limitación del recurso.

5. Otras noticias ambientales

5.1. El Govern de les Illes Balears anuncia la ampliación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera

El nuevo Govern se ha estrenado con anuncios que dirigen las políticas ambientales en sentidos diametralmente opuestos a los de la anterior legislatura. En verano, el Govern anunció que el ejecutivo autonómico requerirá al Estado la ampliación del Parque Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por razones de continuidad ecológica y de ecosistemas. La “delimitación de la zona a proteger se hará con el consenso del Patronato del Parque”, que es quien lo gestiona, y con los sectores implicados, como el pesquero.

De hecho, el Consell de Govern adoptó el acuerdo de petición al Ministerio de Medio Ambiente para que inicie el procedimiento correspondiente para proponer al Consejo de Ministros la ampliación de los límites geográficos del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, con una propuesta con la cual se duplicará la

superficie protegida del Parque, pasando de las 10.000 hectáreas actuales a las 20.000. Por otro lado, se pone en consideración la propuesta de la ONG Oceana, que propone una ampliación que supondría llegar a las 90.000 hectáreas protegidas. Si se adoptara esta última propuesta, el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera se convertiría, así, en el mayor del Estado y el segundo del Mediterráneo, incluyendo hábitats y fauna marina que no tiene ningún otro parque nacional, como los fondos batiales o los coralígenos.

5.2. El Govern se compromete con Oceana a mejorar la protección de los espacios naturales marinos

Oceana expuso al nuevo Govern un listado de temas que considera que se deberían abordar durante esta legislatura. Algunos de ellos hacen referencia a las ampliaciones de las reservas marinas, mientras que otros se centran más en la pesca, sobre todo en la de arrastre, dado que algunas flotas, según el vicepresidente de Oceana, Xavier Pastor, no cumplen la normativa. El Govern ha admitido que los espacios naturales marinos son una asignatura pendiente en las Islas Baleares y que hay que impulsar nuevas políticas para corregir esta anomalía.

Uno de los objetivos en que el nuevo Govern quiere trabajar es conseguir un frente común contra las prospecciones petrolíferas en las Islas Baleares, problema ambiental que ya se ha tratado en números anteriores de esta revista.

5.3. El Govern de les Illes Balears y los consejos insulares de Mallorca y Menorca entrarán a formar parte de la Alianza Mar Blava

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca asesoró a los consejos insulares de Menorca y Mallorca sobre cómo adherirse a la Alianza Mar Blava. Tanto el Consell Insular d'Eivissa como los ayuntamientos de esta isla ya están integrados en esta organización, que comprende administraciones, sector privado y organizaciones sociales y ecologistas en defensa del mar Mediterráneo.

Uno de los frentes abiertos por la Alianza es el rechazo frontal a las prospecciones petroleras en el Mediterráneo que afectan a las Islas Baleares; la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha creado una comisión de seguimiento formada por el

director general de Pesca y Medio Marino y el presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente. En esta línea, se preguntará al Gobierno central sobre el estado de tramitación de los proyectos de prospecciones.

5.4. El Govern quiere dar impulso a la Reserva de la Biosfera de Menorca y dotar el Parque Natural de s'Albufera des Grau de un plan de gestión

Los equipos de gobierno de la CAIB y del Consell Insular de Menorca manifestaron la voluntad de dar el impulso que le corresponde a la Reserva de la Biosfera de una forma global y transversal. Como línea prioritaria, se ha hecho pública la necesidad de elaborar un plan de gestión del Parque Natural de s'Albufera des Grau, espacio natural protegido y núcleo de la reserva de la biosfera. De esta forma, se quiere potenciarlo y cumplir así los objetivos de conservación, de educación ambiental, de investigación y de desarrollo autonómico de la isla. Es Grau es una pieza importante que se tiene que dotar del instrumento de planificación que se merece para afrontar los problemas y mejorar su gestión.

Entre las medidas concretas hechas públicas, se encuentra la de hacer un seguimiento ambiental de la Reserva y difundir las infraestructuras creadas para dar así a conocer el Centro de Interpretación. Es necesario que el visitante de la isla de Menorca sepa que se encuentra en una reserva de la biosfera y que la Albufera des Grau es su núcleo. Igualmente, es necesario que las políticas en general sean coherentes con el hecho de implantarse en un espacio privilegiado.

5.5. Los plenos y los expedientes de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares serán públicos

Se ha dado a conocer por parte del Govern que a partir de esta legislatura los plenos de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares (CMAIB) serán públicos, así como los expedientes. Para consultarlos, no habrá que desplazarse hasta la Consejería, sino que durante el tiempo que estén en exposición pública serán accesibles desde la web de la CMAIB, que se remodelará para hacerla más ágil y sencilla para el público. Los ciudadanos tendrán las herramientas adecuadas para participar con criterio en los debates ambientales y se ganará en transparencia.

La Dirección General de Participación y Transparencia apoya la iniciativa y ha destacado el hecho de que la transparencia a la hora de tramitar recursos y proyectos tiene que ser evidente para que la ciudadanía pueda constatar el funcionamiento de las administraciones.

Por otro lado, la información pública de la CMAIB se mejorará con una nueva página web de la que se encargará la Fundación Bit y que estará terminada dentro de dos años. Con este nuevo portal, los ciudadanos podrán consultar los históricos de los proyectos con un formulario interactivo para hacer búsquedas en los fondos documentales. Por ahora está disponible para su consulta en la página web de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares un proyecto, y podemos constatar que los plenos de la CMAIB ya son públicos.

5.6. Son Bosc quedará protegido definitivamente

Llegando al final de esta crónica, abordaremos uno de los casos más insidiosos ocurridos en Mallorca, con cambios de dirección diametralmente opuestos cada nueva legislatura. La pregunta fatídica que nos hemos tenido que hacer durante años era: ¿qué es Son Bosc, un espacio natural protegido o un campo de golf?

Debe destacarse que la finca fue incorporada al Parque Natural de s'Albufera de Mallorca y que después, mediante medidas legislativas que favorecían intereses privados, se desclasificó, incentivando la construcción de un campo de golf dentro de un hábitat prioritario. Es evidente que la finca tiene que ser un espacio natural protegido por sus altos valores ambientales. La presencia de halcones o de orquídeas protegidas dio lugar a la declaración de Son Bosc como zona de especial protección para las aves (ZEPA), una figura de protección europea que la Comunidad Autónoma tiene la obligación de hacer cumplir.

El nuevo Govern quiere cerrar la puerta definitivamente al campo de golf resolviendo un recurso que la promotora interpuso en el 2010 contra la declaración de ZEPA. La resolución del recurso desestima todas las alegaciones en contra de la continuidad de esta figura de protección en Son Bosc, que quedará así protegido definitivamente.

Como medida complementaria, se trabajará en la tramitación de la derogación de la Ley 9/2010, de 27 de julio, de declaración de interés autonómico de la construcción del

campo de golf de Son Bosc, en Muro, que especificaba que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no podía tener en cuenta esta finca.

Con respecto a la petición de algunas entidades ecologistas de volver a incluir Son Bosc en el marco del Parque Natural de s'Albufera, del cual formó parte siete meses entre los años 2003 y 2004, se ha afirmado que es una cuestión a analizar, aunque actualmente se considera más sólida y segura una figura de protección europea como la ZEPA, con su plan de gestión correspondiente.

5.7. El Govern traslada a Spectrum su negativa a las prospecciones

Cerraremos esta crónica con una breve nota relativa a la negativa del Govern a que se continúen las prospecciones en el Mediterráneo. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca se reunió con una representación de Spectrum Geo Limited, que impulsa un proyecto de prospecciones petroleras en el mar Balear que afectaría a todo el archipiélago. Como es evidente, les puso de manifiesto que el Govern de les Illes Balears y la ciudadanía están en contra de estos proyectos, como se demostró con las movilizaciones ciudadanas de la anterior legislatura.

Cabe recordar que el proyecto de Spectrum espera que el Ministerio de Industria saque a exposición pública el estudio ambiental que la compañía les ha hecho llegar. El Govern insistió en que hay que considerar el impacto global de todos los proyectos que afectan a las Islas Baleares, no solo el estudio sísmico, sino también una posible explotación de hidrocarburos; y es que la empresa intentó desvincular los estudios sísmicos que registraron actividad de los trabajos realizados en la zona de la explotación de hidrocarburos.

Este será un frente a considerar muy seriamente a lo largo de los próximos meses y a buen seguro que tendremos que volver a hablar de ello en estas páginas más a fondo.

Sumari:1. Introducció. 2. Activitat legislativa. 2.1. S'aprova el Decret Llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials. 2.2. S'aprova el Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes Balears. 2.3. Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears. 3. Polítiques sobre patrimoni natural. 3.1. Decret 47/2015, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de l'Arxipèlag de Cabrera; Decret 48/2015, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d'Eivissa i Formentera, i Decret 49/2015, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de la Serra de Tramuntana. 3.2. L'àguila peixatera torna a nidificar a les Pitiüses. 4. Política d'aigües. 4.1. Pla de Sequera a Eivissa: objectiu 2016. 4.2. Els alcaldes d'Eivissa engegaran una campanya de consum responsable d'aigua arran de la reunió amb el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 5. Altres notícies ambientals: 5.1. El Govern de les Illes Balears anuncia l'ampliació del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. 5.2. El Govern es compromet amb Oceana a millorar la protecció dels espais naturals marins. 5.3. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars de Mallorca i Menorca entraran a formar part de l'Aliança Mar Blava. 5.4. El Govern vol impulsar la Reserva de la Biosfera de Menorca i dotar el Parc Natural de s'Albufera des Grau d'un pla de gestió. 5.5. Els plens i els expedients de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears seran públics. 5.6. Son Bosc quedarà protegit definitivament. 5.7. El Govern trasllada a Spectrum la seva negativa a les prospeccions

1. Introducció

Comença la IX legislatura a les Illes Balears amb una majoria parlamentària completament diferent. Les darreres eleccions han donat com a resultat un gir a l'esquerra que propicia la possibilitat de conformar un govern, per primer cop a l'arxipèlag, netament d'aquesta orientació. Els dos pactes de govern multipartit anteriors havien necessitat el concurs de la desapareguda Unió Mallorquina, partit regionalista de centredreta. Això comporta que, també per primera vegada, l'oposició al Parlament sigui de tres forces polítiques (Partit Popular, Proposta per les Illes i Ciutadans) i el govern es mantingui amb el suport de les altres tres forces (Partit Socialista, Més i Podem).

En aquest paràgraf introductori emmarcarem les primeres iniciatives de la nova legislatura, adreçades a modificar els aspectes més controvertits de les nombroses lleis aprovades entre el 2011 i el 2015, amb continguts ultraliberals que han contribuït a deformar la tradició normativa i a trencar el bloc jurídic, amb intromissions creuades entre la legislació agrícola, de turisme, de mines i del sòl. Aquesta visió de predominança sectorial sobre les lleis d'ordenació territorial, urbanística i de medi ambient, ha generat un escenari complex que cal superar. La protecció territorial i ambiental s'han vist seriosament afectades per la dinàmica esmentada. Fent un repàs dels números d'aquesta revista, correlatius a la generació normativa en la VIII legislatura, podem comprovar el retrocés en el camp de l'ús racional dels recursos naturals protegit per l'article 45 de la Constitució espanyola, i el deure de lluitar contra

l'especulació i de garantir el correcte ús del territori, obligant a complir la normativa vigent. La realitat és que les reformes legislatives de la passada legislatura han provocat situacions de dispensa legal i d'amnisties encobertes que han premiat els infractors de la norma i han vulnerat el principi d'igualtat consagrat així mateix al text constitucional. En la mateixa línia, aquest principi d'igualtat es va trencar en afavorir uns col·lectius concrets i marginar bona part de la societat, privilegiant el fet de tenir uns drets que es negaven al conjunt de la ciutadania.

S'ha anunciat un decret llei de mesures urgents que es preveia per a finals d'octubre, amb la intenció de reparar algunes de les previsions legislatives més desafortunades de l'anterior legislatura. Tot i que s'ha forçat el tancament d'aquesta crònica esperant la novetat normativa, a hores d'ara no el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma encara no l'ha aprovat, i tampoc s'ha incorporat altres mesures anunciades des del punt de vista ambiental. Ans al contrari, a hores d'ara s'han frenat i retirat iniciatives no aprovades o no executades en la seva totalitat per l'anterior equip de govern, que seran revisades en profunditat, per exemple: el Pla Director Sectorial de Residus de l'Illa de Mallorca, algunes modificacions en el Pla Territorial Insular de Mallorca i de Menorca, la revisió del projecte d'ampliació de la carretera general de Maó a Ciutadella (també a Menorca), el Pla Hidrològic de les Illes Balears, el Decret de delimitació i ordenació dels alzinars de les illes, entre molts altres documents.

Caldrà esperar els pròxims mesos per veure cap on es dirigeixen les polítiques ambientals al llarg dels quatre anys de nova legislatura, en què s'anuncien la implantació de nous espais naturals, de polítiques de paisatge, la revisió de la legislació d'avaluació ambiental, la revisió de la política de residus, de nous plans de caràcter territorial, entre moltes altres iniciatives en què el medi ambient recupera protagonisme.

2. Activitat legislativa

2.1. S'aprova el Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials

El Consell de Govern del 24 de juliol va aprovar, amb caràcter d'urgència, un decret llei per neutralitzar els efectes del recurs de constitucionalitat interposat contra alguns articles de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, que havia derogat la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial de les Illes

Balears fins llavors vigent. L'adaptació normativa es fonamentava en la necessitat d'adaptar la regulació comercial a la nova legislació estatal derivada de la Directiva 2006/123/CE, de 12 desembre, del Parlament i del Consell europeu, relativa als serveis en el mercat interior. El nou marc *desregulador* deixa poc marge als operadors autonòmics per ordenar una activitat que planteja constatables impactes ambientals i territorials, especialment pel que fa a la implantació de grans superfícies que atreuen milers de persones que es desplacen en vehicles privats, amb repercussions sobre la mobilitat i la contaminació difusa, a més d'altres impactes territorials i paisatgístics, el segellament del sòl a conseqüència dels grans espais d'aparcament que requereixen, i el consum de recursos que necessiten, entre els quals hi ha els destinats a generar l'energia que consumeixen.

La liberalització de serveis ha fet que el desenvolupament normatiu des del punt de vista comercial eximeixi d'autoritzacions prèvies una gran majoria d'establiments comercials i de serveis, que se sotmeten al règim de comunicació prèvia. El llinar s'ha establert en 750 m² de superfície útil d'exposició i venda al públic, en l'àmbit de l'Estat espanyol amb la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

El que convé comentar aquí és que a les Balears el règim de superfícies s'ajusta a la realitat insular, fet que implica que el llinar s'estableixi en 700 m² a Mallorca, 400 m² a Menorca i Eivissa, i en 200 m² a Formentera. I tot això s'argumenta, precisament, per raons d'interès general, relacionades amb la distribució comercial, per motius de protecció mediambiental i de l'entorn urbà, d'ordenació del territori, i per preservar el patrimoni històric i artístic, sense oblidar el fet de la dispar extensió i les característiques geoeconòmiques de cadascuna de les illes.

La invocació del medi ambient i el paisatge, i també l'impacte sobre l'entorn urbà és, actualment, l'únic motiu que permet la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, per regular els efectes de les implantacions de les grans superfícies comercials, que hores d'ara es converteixen en artefactes que modifiquen la morfologia i les dinàmiques territorials i urbanes.

La ulterior relació ambiental des del punt de vista comercial la trobarem en un futur en el desenvolupament dels plans directors sectorials d'equipaments comercials, responsables d'implantar les mesures d'adequació a l'entorn en funció de les aptituds

territorials de les potencials zones de recepció d'aquests grans establiments, per raons imperioses d'interès general.

Segons la Directiva 2006/123/CE, el concepte de “raons imperioses d'interès general” ha estat recollit pel Tribunal de Justícia en la seva jurisprudència relativa als articles 43 i 49 del Tractat i pot continuar evolucionant. La noció que reconeix la jurisprudència del Tribunal de Justícia abasta almenys els àmbits següents:

[O]rdre públic, seguretat pública i salut pública, en el sentit dels articles 46 i 55 del Tractat, manteniment de l'ordre en la societat, objectius de política social, protecció dels destinataris dels serveis, protecció del consumidor, protecció dels treballadors, inclosa la seva protecció social, benestar animal, preservació de l'equilibri financer dels règims de seguretat social, prevenció de frau, prevenció de la competència deslleial, protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, inclosa la planificació urbana i rural, protecció dels creditors, garantia d'una bona administració de justícia, seguretat vial, protecció de la propietat intel·lectual i industrial, objectius de política cultural, inclosa la salvaguarda de la llibertat d'expressió dels diversos components (especialment, els valors socials, culturals, religiosos i filosòfics de la societat), la necessitat de garantir un alt nivell d'educació, manteniment de la diversitat de premsa, foment de la llengua nacional, conservació del patrimoni nacional històric i artístic i política veterinària.

Caldrà esperar els avenços en la redacció dels instruments d'ordenació territorial per comprovar quines són les diferents estratègies insulars que es desplegaran amb la intenció de controlar els efectes territorials i ambientals de la implantació dels grans establiments comercials.

2.2. S'aprova el Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes Balears

En l'anterior legislatura el turisme ha estat un dels grans protagonistes de les innovacions legislatives. En aquesta línia s'ha aprofitat el valor estratègic del sector agrícola a les illes per intentar buscar alternatives a la generació de rendes al camp allà on l'activitat no en dóna més. En aquest context, la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, es va aprovar amb la pretensió d'impulsar també les activitats complementàries que poden generar rendes afegides a les de l'activitat agrària. Es busca aportar un complement econòmic que permeti mantenir les explotacions

agràries i el patrimoni arquitectònic rural de les Illes Balears des d'una òptica de dinamització del sector agrari mitjançant l'impuls de de múltiples activitats a l'explotació agrària, tot això amb l'objectiu d'assegurar-ne la viabilitat en el temps i crear i mantenir ocupació.

La llei entén l'activitat agrària com un conjunt de treballs necessaris per obtenir productes agrícoles, ramaders o forestals. Es considera l'agricultura un dels sectors de l'activitat econòmica que, a diferència dels sectors secundari i terciari, té, a més, una importància de primer ordre, no només com a activitat de producció, sinó també en els àmbits social, territorial, paisatgístic i mediambiental. És el que s'anomena un sector estratègic, no tant pel pes econòmic que aporta com pel fet de garantir la conservació del paisatge rural.

Per aquest motiu s'incentiven activitats complementàries a l'agricultura que inclouen alternatives de diversificació relacionades amb la destinació o la naturalesa de les finques vinculades a una explotació agrària preferent. Aquestes activitats alternatives haurien de representar una millora de les rendes agràries diferents de les que es deriven de la producció agrícola, ramadera o forestal.

En aquest marc normatiu, el Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes Balears, intenta facilitar que el sector agrari sigui capaç d'aprofitar els recursos propis de l'explotació i de generar sinergies i complementarietats entre les diverses activitats per oferir béns i serveis nous d'acord amb les demandes del mercat i dels condicionants agrosocials del territori. Aquestes activitats impliquen impulsar el potencial agroturístic de les explotacions, donant noves destinacions a les edificacions existents. Així es potencia l'explotació dels agroturismes, dels refugis, de l'agrooci i de l'agrocultura.

Igualment el Decret implanta un règim simplificat de declaració responsable d'inici de l'activitat agroturística, dirigit a facilitar-ne la implantació. De la mateixa manera les competències es distribueixen segons l'activitat: a) Davant de la Direcció General de Turisme de la Conselleria de Turisme i Esports o el consell insular competent, en cas que l'activitat consisteixi en agroturisme o agrooci; b) Davant la Direcció General de Medi Rural i Marí de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori o els consells insulars competents, en cas que l'activitat consisteixi en refugi o agrocultura.

Aquest repartiment depèn de les transferències que cada consell insular n'hagi rebut en aplicació de l'Estatut d'autonomia.

Com diu el Decret, la facultat d'inici de les activitats, per tant, queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable la persona interessada ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. En tot cas, la Direcció General de Medi Rural i Marí o el consell insular competent ha d'emetre un informe preceptiu i vinculant sobre la vinculació de l'explotació agrària preferent d'acord amb l'article 83 de la Llei 12/2014.

D'altra banda, hi ha una especificitat per a l'autorització d'obres. Així, si l'inici de l'activitat agroturística requereix la realització d'obres, és preceptiva la petició de l'informe a la Direcció General de Medi Rural i Marí o al consell insular competent, d'acord amb el que estableix l'article 100 de la Llei 12/2014.

Pel que fa al règim d'avaluació d'impacte ambiental, el Decret estableix que, d'acord amb el que preveu el tercer paràgraf de l'apart 4 de l'article 44 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, els nous establiments d'agroturisme que tinguin més de 30 places destinats al públic estan subjectes a l'avaluació d'impacte ambiental a què es refereix el grup 7 h de l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. Igualment, estan subjectes a l'avaluació esmentada les reformes i les ampliacions d'agroturismes i hotels rurals, l'execució de les quals suposi que l'establiment resultant disposi de més de 30 places destinades al públic. Se n'exceptuen les ampliacions inferiors al 10% de les places existents. En aquest punt ens trobem un nou problema, el desplaçament que hi ha hagut en la legislació autonòmica d'avaluació ambiental, amb l'entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que deixa compromesa l'aplicació d'aquests preceptes en absència d'una taula de vigència. Afortunadament, el BOIB núm. 168 de 14 de novembre de 2015 (pàg. de 45254 a 45254), sotmet a informació pública el nou Avantprojecte de llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, per adaptar-se a les exigències del nou marc normatiu bàsic de l'Estat, qüestió que haurem d'analitzar en el pròxim número de l'RCDA.

2.3. Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears

Com ja vam donar compte al seu dia en l'RCDA, les Balears van aprovar la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears. Ara, en desplegament dels apartats 3, 4 i 5 de l'article 8 de l'esmentat text legal, es dicta el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears.

L'objecte d'aquesta nova disposició normativa és establir un marc jurídic homogeni per a totes les reserves marines de les aigües interiors del litoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel que fa a les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques. Amb aquesta intenció es regulen les activitats següents: a) pesca professional d'arts menors i marisqueig professional; b) pesca recreativa i marisqueig recreatiu; c) espècies protegides i talles mínimes, i d) activitats subaquàtiques.

Aquesta regulació d'activitat afecta les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears següents: a) la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera; b) la Reserva Marina del Nord de Menorca; c) la Reserva Marina de la Badia de Palma; d) la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca; e) la Reserva Marina de l'Illa del Toro; f) la Reserva Marina de les Illes Malgrats, i g) la Reserva Marina del Llevant de Mallorca.

A les Illes Balears, les reserves marines han demostrat que són un instrument eficaç de conservació dels recursos pesquers i d'ajuda a la pesca professional d'arts menors: a les reserves hi ha més peixos, són més grossos, hi abunden espècies que fora de les reserves escassegen, i les captures són més importants en quantitat i qualitat. D'altra banda, les reserves marines s'han consolidat com un referent important per a l'activitat econòmica del busseig turístic, amb més de 25.000 immersions anuals. Per això, actualment les Balears disposen de les 7 reserves esmentades amb una superfície total de 58.000 ha i són un important instrument de gestió pesquera del Govern de les Illes Balears.

Les reserves marines declarades a l'empara de la legislació autonòmica són àrees marines on es limita l'explotació dels recursos marins vius per incrementar la

re població d'alevins i fomentar la proliferació de les espècies marines objecte d'exploració o protegir els ecosistemes marins amb característiques ecològiques diferenciades. D'acord amb el que disposa l'article 8.3 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, a l'interior de les reserves pot ser objecte de regulació qualsevol activitat que pugui afectar els recursos marins vius i necessàriament ho han de ser totes les activitats d'extracció de flora o fauna marines i les activitats subaquàtiques.

Tot i que la comunitat autònoma de les Illes Balears va ser capdavantera a Espanya pel que fa a reserves marines, amb la declaració el 1982 del Paisatge Protegit Submarí en aigües de Mallorca des del Club Nàutic de s'Arenal i el cap de Regana, formalment les primeres reserves es van crear el 1999, per mitjà del Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins vius de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així, el 28 de maig de 1999 s'establí la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera; el 15 de juny de 1999 la Reserva Marina del Nord de Menorca, i el 6 d'agost de 1999 la Reserva Marina de la Badia de Palma, a partir de l'antiga figura del paisatge protegit submarí. Posteriorment, el 3 de maig de 2002 s'establí la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca; el 28 de maig de 2004 la Reserva Marina de l'Illa del Toro; el 15 de juny de 2004 la Reserva Marina de les Illes Malgrats, i, finalment, el 23 de març de 2007, la Reserva Marina del Llevant de Mallorca.

Amb el temps, la normativa que regula cadascuna d'aquestes reserves marines ha experimentat un procés autònom de desenvolupament i consolidació, sovint a partir de decisions preses en el marc de les comissions de seguiment corresponents, de manera que actualment es troba dispersa en 42 disposicions de diferent rang, és innecessàriament complexa i heterogènia, i li manca un fil conductor que li doni homogeneïtat. Per això, i amb l'entrada en vigor de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, es va fer aconsellable establir, tot i respectant les particularitats de les diferents reserves, uns principis comuns pel que fa a reserves marines en l'àmbit de les Illes Balears, amb el desplegament reglamentari de l'article 8 de la Llei. Evidentment, el Decret també s'ha d'aplicar en totes les reserves marines que es declarin en un futur en aplicació dels articles 8.1 i 9 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aquicultura a les Illes Balears, i és molt probable que aquesta legislatura es declarin noves reserves, o se n'ampliïn algunes de les existents, a la vista dels anuncis emesos.

3. Polítiques sobre patrimoni natural

3.1. Decret 47/2015, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de l'Arxipèlag de Cabrera; Decret 48/2015, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d'Eivissa i Formentera, i Decret 49/2015, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de la Serra de Tramuntana

En el marc de les previsions derivades de la implantació de la xarxa ecològica europea Natura 2000, s'han començat a desplegar els instruments de gestió de les àrees incloses en la proposta autonòmica. La declaració de llocs d'importància comunitària (LIC) i de zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) incorporades a la xarxa Natura 2000, comporta la declaració de zones especials de conservació (ZEC) en aplicació dels articles 4 i 6 de la Directiva 92/43/CEE, i dels articles 44 i 45 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

Així, les mesures de conservació en execució de les assenyalades previsions normatives, han d'implicar l'adopció dels corresponents plans o instruments de gestió adequats i les mesures reglamentàries, administratives o contractuals apropiades. Igualment, cal recordar que la declaració de les ZEC s'ha d'aprovar al més aviat possible i com a màxim en un termini de sis anys des que s'adopti la llista inicial de LIC per a la regió biogeogràfica mediterrània.

Com a requisit per a la declaració de ZEC, cal que el pla o l'instrument de gestió hagi estat aprovat amb anterioritat o que s'aprovi conjuntament amb aquesta declaració, d'acord amb l'article 42.3 de la Llei 42/2007. Les ZEPA, però, no cal que compleixin aquest requisit, atès que no estan afectades per les disposicions d'aquest article de la Llei. Tanmateix, segons la jurisprudència del Tribunal de Luxemburg, "els estats han de garantir que la classificació d'un lloc com a ZEPA impliqui automàticament i simultàniament l'aplicació d'un règim de protecció i conservació conforme amb el dret comunitari".

En el cas de les Illes Balears, correspon al Consell de Govern, mitjançant un acord, la declaració com a ZEC dels LIC que hagin estat seleccionats i designats per la Comissió Europea, seguint el procediment que estableix l'article 9 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). Així, en compliment de l'article 9.2 a) de la LECO, el 2 d'agost de 2013 el Consell de Govern va acordar iniciar el procediment per declarar ZEC els LIC de les Illes Balears que figuren en l'annex I de l'Acord i facultar el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la tramitació administrativa que correspon per elaborar els documents dels plans o els instruments de gestió de les ZEC.

En aquell moment es va iniciar l'elaboració d'una sèrie de plans de gestió que havien de seguir les directrius de conservació de la xarxa Natura 2000 a Espanya, aprovades per la Resolució de 21 de setembre de 2011 de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic (BOE núm. 244, de 10 d'octubre de 2011), resolució que incorpora l'Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient de 13 de juliol de 2011.

Després d'un procés de participació i del corresponent tràmit d'informació pública, es van tancar els documents de gestió i es van aprovar les mesures de conservació necessàries per respondre a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats naturals i de les espècies d'interès comunitari presents en la zona especial de conservació (ZEC) i en la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) inclosa en els àmbits de l'arxipèlag de Cabrera, de ses Salines d'Eivissa i Formentera i de la serra de Tramuntana.

3.2.L'ànguila pescadora torna a nidificar a les Pitiüses

Les illes d'Eivissa i de Formentera són ara les protagonistes de la notícia. Els plans de conservació i recuperació donen els fruits desitjats en el cas de l'ànguila pescadora. És un dels rapinyaires més escassos de tota la Mediterrània. Val a dir, que en la segona meitat del segle passat va experimentar una gran recessió i es va convertir en l'espècie més amenaçada de tot l'Estat: va desaparèixer de les costes de la península Ibèrica, d'una gran part del litoral de les Balears, de Sardenya i d'altres illes. Només se'n va mantenir una petita població a la costa nord de Mallorca i a la *tramuntana* de Menorca, a l'illa de Còrsega i a la costa del Marroc.

Les amenaces sobre l'espècie poden resumir-se en dos factors, que són els que més han afectat les àguiles: la persecució directa i l'electrocució. Fins als anys setanta, era

relativament freqüent que les grans àguiles rebessin trets i, en algunes zones, els nius eren espoliats com a curiositat o per menjar-se'n els polls. Un factor encara més insidiós és l'electrocució: les àguiles solen posar-se en torres elèctriques, i ben sovint ho fan mullades, després de pescar, amb un risc molt elevat de morir electrocutades.

Afortunadament, el 2007 el Govern va aprovar un pla de conservació de l'espècie per donar continuïtat a diverses actuacions de protecció que havien establert des dels anys vuitanta tant l'Administració i les ONG de conservació, i enfortir-les. A l'empara del pla de conservació s'ha treballat per assegurar que l'espècie fos respectada, i que es feia una protecció efectiva de les zones de cria i de pesca. Això no obstant, una de les línies de treball més importants ha consistit en la correcció de punts perillosos per a l'electrocució de les aus. El conveni entre el Govern i l'empresa elèctrica ENDESA ha permès aïllar, en benefici de diverses espècies, 1.103 punts perillosos a totes les Balears.

L'evolució de la situació de conservació de l'espècie a la Mediterrània ha estat molt positiva: la població balear, que havia arribat a un mínim d'11 parelles en els anys vuitanta, ha passat a 24 actualment i s'han recuperat zones de nidificació a Cabrera, la costa d'Artà i Calvià. A Còrsega va passar de tres parelles el 1974 a una trentena actualment. Només al Marroc i Algèria l'evolució dels darrers anys és negativa, i l'espècie ha perdut el 20% de punts de nidificació. D'altra banda, a Andalusia s'ha encetat un programa de reintroducció i actualment hi nidifiquen les primeres parelles.

La novetat ha estat enguany a l'illa d'Eivissa: en un penya-segat marí una parella ha post per segon any consecutiu. L'any passat no hi va haver eclosió (cosa que sol passar amb aus inexpertes), però enguany un poll ha completat el seu desenvolupament i vola des de fa dies per la zona. Probablement l'animal emprendre una fase de dispersió, que el pot dur fins a la península o al continent, però la parella està ben assentada i és el nucli inicial perquè es torni a estendre per les costes d'Eivissa, Formentera i alguns illots. S'ha de destacar que el niu on han criat les àguiles és justament on havien nidificat per darrera vegada en els anys setanta del segle passat; el niu vell s'havia desfet, i el personal de Medi Ambient l'havia refet per estimular l'assentament de les aus.

4. Política d'aigües

4.1. Pla de Sequera a Eivissa: objectiu 2016

L'aigua és un recurs escàs i limitat a les Illes, i en el cas d'Eivissa encara es fa més evident. És indubtable que hi ha un problema de recursos hídrics que s'ha de solucionar amb urgència. La tramitació del Pla de Sequera obre la possibilitat d'implantar mesures concretes i extraordinàries i conforma un marc jurídic del qual no es disposa actualment. El problema s'originà en el moment que l'anterior legislatura es va adoptar la decisió de desvincular el pla de sequera del Pla Hidrològic de les Illes Balears. Un dels nous reptes de la nova Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és el de revisar el Pla Hidrològic, que incompleix els dictàmens ambientals de la Unió Europea.

D'altra banda, es plantejarà al Govern central la necessitat d'infraestructures de l'illa, una de les quals és la dessaladora de Santa Eulària des Riu, que encara no està recepcionada i acumula un sobrecost del 50%. Igualment, cal que el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa i els ajuntaments de l'illa adoptin el compromís d'impulsar un consum responsable de l'aigua en aquesta illa, que fa 24 mesos que es troba en sequera tècnica. En aquest sentit, es prioritzarà l'ús domèstic sobre l'industrial mentre es desvien cabals i s'assessora tècnicament els ajuntaments sobre les depuradores i les dessaladores. Cal un canvi de paradigma i una profunda transformació de mentalitat per entendre les conseqüències del consum d'un recurs per sobre del llindar de la seva recuperació o renovació.

4.2. Els alcaldes d'Eivissa engegaran una campanya de consum responsable d'aigua arran de la reunió amb el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Relacionat amb la ressenya anterior, al llarg de l'estiu de 2015 s'han viscut problemes reals d'abastiment d'aigua a Eivissa. De fet, es va intentar elaborar i aprovar un decret llei destinat a pal·liar-ne el dèficit, amb l'aplicació de mesures extraordinàries.

Les reticències al recurs del decret llei per part del nou Govern, en bona part com a reacció a l'abús que es va fer d'aquesta figura legislativa a l'anterior legislatura, va provocar la derivació de les mesures cap als ajuntaments de l'illa.

Els alcaldes eivissencs van valorar públicament l'esforç del Govern per contribuir a solucionar els problemes de sequera i de qualitat i sanejament de l'aigua que pateix l'illa i, com a reacció, van acordar publicar un ban, de manera conjunta, per recomanar el consum responsable d'aigua i altres mesures de sensibilització de la població davant la manifesta limitació del recurs.

5. Altres notícies ambientals

5.1. El Govern de les Illes Balears anuncia l'ampliació del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera

El nou Govern s'ha estrenat amb anuncis que dirigeixen les polítiques ambientals en sentits diametralment oposats als de l'anterior legislatura. A l'estiu, el Govern va anunciar que l'executiu autonòmic requerirà a l'Estat l'ampliació del Parc Maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera, per raons de continuïtat ecològica i d'ecosistemes. La "delimitació de la zona que s'ha de protegir es farà amb el consens del Patronat del Parc", que és qui el gestiona, i amb els sectors implicats, com el pesquer.

De fet, el Consell de Govern va adoptar l'acord de petició al Ministeri de Medi Ambient que iniciï el procediment corresponent per proposar al Consell de Ministres l'ampliació dels límits geogràfics del Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera, amb una proposta amb la qual es duplicarà la superfície protegida del Parc, que passarà de les 10.000 hectàrees actuals a les 20.000 hectàrees. D'altra banda, es posa en consideració la proposta de l'ONG Oceana, que proposa una ampliació que suposaria arribar a les 90.000 hectàrees protegides. Si s'adopta aquesta darrera proposta, el Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera es convertiria, així, en el més gran de l'Estat i en el segon de la Mediterrània, incloent-hi hàbitats i fauna marina que no té cap altre parc nacional, com els fons batials o els coral·lígens.

5.2. El Govern es compromet amb Oceana a millorar la protecció dels espais naturals marins

Oceana va exposar al nou Govern un llistat de temes que considera que s'haurien d'abordar durant aquesta legislatura. Alguns fan referència a les ampliacions de les reserves marines mentre que d'altres se centren més en la pesca, sobretot en la d'arrossegament, ja que algunes flotes, segons ha afirmat el vicepresident d'Oceana,

Xavier Pastor, no compleixen la normativa. El Govern ha admès que els espais naturals marins són una assignatura pendent a les Illes Balears, i que cal impulsar noves polítiques per corregir aquesta anomalia.

Un dels fronts que el nou Govern vol treballar és el d'aconseguir un front comú contra les prospeccions petrolíferes a les Illes Balears, problema ambiental que ja hem tractat en números anteriors d'aquesta revista.

5.3. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars de Mallorca i Menorca entraran a formar part de l'Aliança Mar Blava

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, del Govern, va assessorar els consells insulars de Menorca i Mallorca sobre com adherir-se a l'Aliança Mar Blava. Tant el Consell Insular d'Eivissa com els ajuntaments d'aquesta illa ja estan integrats en aquesta organització, que comprèn administracions, sector privat i organitzacions socials i ecologistes en defensa de la mar Mediterrània.

Un dels fronts oberts per l'Aliança és el rebuig frontal a les prospeccions petrolíferes a la Mediterrània que afecten les Illes Balears. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha creat una comissió de seguiment formada pel director general de Pesca i Medi Marí i el president de la Comissió Balear de Medi Ambient. En aquesta línia es demanarà al Govern central sobre l'estat de tramitació dels projectes de prospeccions.

5.4. El Govern vol donar impuls a la Reserva de la Biosfera de Menorca i dotar el Parc Natural de s'Albufera des Grau d'un pla de gestió

Els equips de govern de la CAIB i del Consell de Menorca van manifestar la voluntat de donar l'impuls que li pertoca a la Reserva de la Biosfera d'una forma global i transversal. Com a línia prioritària s'ha fet pública la necessitat d'elaborar un pla de gestió del Parc Natural de s'Albufera des Grau, espai natural protegit i nucli de la reserva de la biosfera. D'aquesta forma es vol potenciar i complir els objectius de conservació, d'educació ambiental, d'investigació i desenvolupament autonòmic de l'illa. Es Grau és una peça important que s'ha de dotar de l'instrument de planificació que es mereix per afrontar els problemes i millorar-ne la gestió.

Entre les mesures concretes que s'han fet públiques, es troben la de fer un seguiment ambiental de la reserva i difondre les infraestructures creades per donar a conèixer el

centre d'interpretació. Cal que el visitant de l'Illa de Menorca sàpiga que es troba en una reserva de la biosfera i que l'albufera des Grau n'és el nucli. Igualment cal que les polítiques en general siguin coherents amb el fet d'implantar-se en un espai privilegiat.

5.5. Els plens i els expedients de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears seran públics

El Govern ha fet públic que a partir d'aquesta legislatura els plens de la comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) seran públics, i també els expedients. Per consultar-los no caldrà desplaçar-se fins a la conselleria sinó que durant el temps que estiguin en exposició pública seran accessibles des del web de la CMAIB, que es remodelarà per fer-lo més àgil i senzill per al públic. Els ciutadans tindran les eines per participar amb criteri en els debats ambientals i es guanyarà en transparència.

La Direcció General de Participació i Transparència dóna suport a la iniciativa i ha destacat el fet que la transparència a l'hora de tramitar recursos i projectes ha de ser evident perquè la ciutadania pugui constatar el funcionament de les administracions.

D'altra banda, la informació pública de la CMAIB es millorarà amb un nou web, del qual s'encarregarà la Fundació Bit i que estarà enllestit d'aquí a dos anys. Amb aquest nou portal els ciutadans podran consultar els històrics dels projectes amb un formulari interactiu per fer recerques. A hores d'ara, al web de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, està disponible un projecte per consultar i podem constatar que els plens de la CMAIB ja són públics.

5.6. Son Bosc quedarà protegit definitivament

Arribant al final d'aquesta crònica, abordarem un dels casos més insidiosos que han ocorregut a Mallorca, amb canvis de direcció diametralment oposats cada legislatura. La pregunta fatídica que ens hem hagut de fer durant anys ha estat: Què és Son Bosc, un espai natural protegit o un camp de golf?

Val a dir que la finca va ser incorporada al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, i que després, mitjançant unes mesures legislatives que afavorien interessos privats, es va desclassificar, i es va incentivar la construcció d'un camp de golf dins un hàbitat

prioritari. És evident que la finca ha de ser un espai natural protegit pels seus elevats valors ambientals. La presència de falcons o d'orquídies protegides va desembocar en la declaració de Son Bosc com a zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA), una figura de protecció europea que la comunitat autònoma té l'obligació de fer complir.

El nou Govern vol tancar la porta definitivament al camp de golf resolent un recurs que la promotora va interposar el 2010 contra la declaració de ZEPA. La resolució del recurs desestima totes les alegacions en contra de la continuïtat d'aquesta figura de protecció a Son Bosc, que quedarà, així, definitivament protegit.

Com a mesura complementària es treballarà en la tramitació de la derogació de la Llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració d'interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc, a Muro, que especificava que el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals no podia tenir en compte aquesta finca.

Pel que fa a la petició d'algunes entitats ecologistes de tornar a incloure Son Bosc en el marc del Parc Natural de s'Albufera, del qual va formar part set mesos entre els anys 2003 i 2004, s'ha afirmat que és una qüestió que cal analitzar, tot i que es considera, a hores d'ara, més sòlida i segura una figura de protecció europea com la ZEPA, amb el seu pla de gestió corresponent.

5.7. El Govern trasllada a Spectrum la seva negativa a les prospeccions

Tancarem aquesta crònica amb una breu nota corresponent a la negativa del Govern que es continuï amb les prospeccions a la Mediterrània. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, es va reunir amb una representació d'SpectrumGeoLimited, que impulsa un projecte de prospeccions petrolieres al mar Balear que afectaria tot l'arxipèlag. Com és evident, els va fer palès que el Govern de les Illes Balears i la ciutadania estan en contra d'aquests projectes, com van demostrar les mobilitzacions ciutadanes fetes en l'anterior legislatura.

Cal recordar que el projecte d'Spectrum espera que el Ministeri d'Indústria tregui a exposició pública l'estudi ambiental que la companyia els ha fet arribar. El Govern va insistir que cal considerar l'impacte global de tots els projectes que afecten les Illes Balears, no només l'estudi sísmic, sinó també una possible explotació d'hidrocarburs; i és que l'empresa va intentar desvincular els estudis sísmics que registraren activitat dels treballs fets a la zona de l'explotació d'hidrocarburs.

Aquest serà un front que caldrà considerar molt seriosament al llarg dels pròxims mesos i de ben segur n'haurem de tornar a parlar en aquestes pàgines més a fons.